



**University of
Zurich**^{UZH}

**Zurich Open Repository and
Archive**

University of Zurich
University Library
Strickhofstrasse 39
CH-8057 Zurich
www.zora.uzh.ch

Year: 2016

**El referéndum ante la crisis de legitimidad: ¿solución o síntoma del
problema? Un análisis de América del Sur en el siglo XXI**

Welp, Yanina

Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich

ZORA URL: <https://doi.org/10.5167/uzh-127365>

Book Section

Published Version

Originally published at:

Welp, Yanina (2016). El referéndum ante la crisis de legitimidad: ¿solución o síntoma del problema? Un análisis de América del Sur en el siglo XXI. In: Tuesta Soldevilla, Fernando. Partidos políticos y elecciones. Representación política en América Latina. Perú: JNE, 145-159.

Partidos políticos y elecciones

REPRESENTACIÓN POLÍTICA
AMÉRICA LATINA

FERNANDO TUESTA SOLDEVILLA
EDITOR

David Altman
Margarita Batlle
Julio Cotler Dolberg
Manuel Carrillo Poblano
Jennifer Cyr
Mariano Cucho Espinoza
Tomáš Došek
Delia M. Ferreira Rubio
Flavia Freidenberg
Claudio Fuentes
Gerardo De Icaza
Alicia Lissidini
Daniel Lemaitre
Noam Lupu

Betilde Muñoz Pogossian
Jennifer McCoy
Carlos Meléndez
Dieter Nohlen
Aníbal Pérez-Liñán
Juan Rial
Paolo Sosa Villagarcía
Francisco A. Távara Córdova
Martín Tanaka
José Thompson
Marcelo Varela-Erasheva
Daniela Vargas
Jorge Luis Yrivarren Lazo
Yanina Welp



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

ESCUELA DE
GOBIERNO

Partidos políticos y elecciones.

REPRESENTACIÓN POLÍTICA
EN AMÉRICA LATINA

FERNANDO TUESTA SOLDEVILLA
EDITOR

Partidos políticos y elecciones

REPRESENTACIÓN POLÍTICA
AMÉRICA LATINA

FERNANDO TUESTA SOLDEVILLA
EDITOR

David Altman
Margarita Batlle
Julio Cotler Dolberg
Manuel Carrillo Poblano
Jennifer Cyr
Mariano Cucho Espinoza
Tomáš Došek
Delia M. Ferreira Rubio
Flavia Freidenberg
Claudio Fuentes
Gerardo De Icaza
Alicia Lissidini
Daniel Lemaître
Noam Lupu

Betilde Muñoz Pogossian
Jennifer McCoy
Carlos Meléndez
Dieter Nohlen
Aníbal Pérez-Liñán
Juan Rial
Paolo Sosa Villagarcía
Francisco A. Távara Córdova
Martín Tanaka
José Thompson
Marcelo Varela-Erasheva
Daniela Vargas
Jorge Luis Yrivarren Lazo
Yanina Welp



Al servicio
de las personas
y las naciones



JURADO NACIONAL DE ELECCIONES



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

ESCUELA DE
GOBIERNO

EL REFERÉNDUM ANTE LA CRISIS DE LEGITIMIDAD: ¿SOLUCIÓN O SÍNTOMA DEL PROBLEMA? UN ANÁLISIS DE AMÉRICA DEL SUR EN EL SIGLO XXI*

Yanina Welp

Introducción

Los países de América del Sur se encuentran entre los que más intensamente han incorporado mecanismos de democracia directa (MDD) a sus constituciones (Serdült y Welp 2012), sin embargo, hay marcadas diferencias entre los casos. En algunos países los mecanismos introducidos son relativamente limitados tanto en su alcance como en relación con los actores que pueden activarlos. Unos dan preeminencia al Parlamento o habilitan al Ejecutivo pero en situaciones muy claramente delimitadas (Argentina, Brasil o Chile); otros han incluido un amplio espectro de mecanismos que pueden ser activados por diversos actores (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia); mientras un tercer grupo de países otorga especial poder a la ciudadanía a través del referendo desde abajo y/o el obligatorio, excluyendo o limitando la potestad del Ejecutivo para iniciar una convocatoria (Uruguay, Perú y Paraguay).

El carácter de las decisiones tomadas (consultivas o vinculantes) y los temas susceptibles de ser decididos por referéndum¹ (sean amplios o restringidos) son claves al analizar las potencialidades de la democracia directa en cada país. Pero, además de profundizar en el estudio de la normativa, el análisis de las prácticas es central para comprender el rol jugado por estos mecanismos. Los MDD podrían fortalecer la democracia representativa, si permiten incrementar la capacidad de respuesta del sistema, contribuyendo a su legitimación. Esto es, si funcionan como canales para que la ciudadanía tome decisiones relevantes en el marco de campañas justas (con acceso a información completa y posibilidades equilibradas de intervenir en dicho debate), y las decisiones son respetadas. ¿Pero es esto lo que se observa en América del Sur? A continuación se trata de responder a esta pregunta a través de i) la presentación del marco en que los mecanismos de democracia directa podrían contribuir a fortalecer la representación, ii) un análisis somero de la regulación en diez países de América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), y iii) un análisis de las prácticas registradas entre los años 2000 y 2014. Con base en lo previo se presentan las conclusiones (iv).

Representación y participación directa

Pitkin (1967) ha definido la representación como el acto por el que una persona adquiere un derecho para actuar en nombre de otros. Así, el representado pierde la capacidad de exigir que el gobernante cumpla con sus responsabilidades, con sus promesas o con lo que quienes le han conferido el poder esperan de él. Las elecciones funcionan como mecanismo de castigo o premio al confirmar al político o partido en el poder o reemplazarlo. Pero las bases de legitimidad de la representación no son estables, sino históricas y contextuales (Manin 1998), relacionadas, por ejemplo, con la organización del gobierno, el funcionamiento de los medios de comunicación o el propio sistema político.

¹ Referéndum y MDD se usan como sinónimos.

Samuels y Schugart (2003) sostienen que sistemas presidencialistas y sistemas parlamentarios pueden vincularse a distintos modelos de representación. Para estos autores, el presidencialismo limita las posibilidades de la *representación por mandato* (esto es, representación prospectiva o, en otras palabras, basada en lo que el gobernante hará durante su gestión), mientras incentiva la *representación por rendimiento de cuentas* (esto es, representación retrospectiva o referida a la evaluación de lo que el representante ha hecho durante su gobierno). Lo contrario ocurriría con los sistemas parlamentarios, en que los mecanismos de representación por mandato están más aceitados, mientras el rendimiento de cuentas presenta mayor complejidad. Los mecanismos de democracia directa podrían contribuir a fortalecer la representación al funcionar como instrumentos que permiten mostrar la aprobación o no de la gestión de un gobierno (*rendimiento de cuentas*) y también indicar qué es lo que los ciudadanos desean que se haga (*mandato*). Pero los MDD o, al menos algunos de ellos, van más allá del potencial fortalecimiento de la representación porque permiten la intervención directa de la ciudadanía, alterando el esquema representativo en sus raíces.

Kriesi (2005: 7) sugiere que la introducción de mecanismos de democracia directa puede ayudar a solventar dos limitaciones de la democracia representativa porque 1) la iniciativa ya no está exclusivamente en manos de los que gobiernan y 2) las decisiones particulares del gobierno pueden ser sometidas a control (frente al modelo en que el gobierno es responsable por una multiplicidad de cuestiones que los ciudadanos solo pueden sancionar colectivamente en las elecciones), cuando hay dispositivos que permiten a los ciudadanos proponer iniciativas y someter al escrutinio general decisiones particulares del gobierno (por ejemplo, a través del referéndum abrogativo o los referendos de ratificación). Pero los argumentos de Kriesi se basan en el sistema suizo, en que la democracia directa solo puede ser activada por la ciudadanía y porque la Constitución así lo determina.

En sistemas presidencialistas, la introducción y uso de MDD “desde abajo” (activados mediante la recolección de un determinado número de firmas, entre otros requisitos) y obligatorios (activados “automáticamente”, porque así lo determina la Constitución) podrían contribuir a fortalecer la *representación por mandato*, al otorgar poder a la ciudadanía para intervenir en la definición de los asuntos públicos más allá de la elección de representantes. Por el contrario, los mecanismos en manos de las autoridades y, especialmente, el referéndum, en manos del presidente, podrían contribuir a un mayor desequilibrio entre poderes, aunque, incluso en estos casos –siempre que se respeten las garantías institucionales democráticas– pueden fortalecer la legitimidad de la toma de decisiones, que quedan en manos de la ciudadanía².

Finalmente, el cumplimiento de esta voluntad manifestada en las urnas incrementaría la capacidad de respuesta del gobierno. A menudo, en definitiva, se sostiene que la introducción de mecanismos participativos podría convertirse en una solución a los problemas de la representación. Sin embargo, sostenemos que las prácticas de democracia directa funcionarán más como síntoma o expresión del estado de la democracia que como una solución a sus problemas. A continuación pasaremos al análisis de lo que ocurre en la región.

Las provisiones legales

Definimos como mecanismos de democracia directa (MDD) a un grupo de instrumentos que permite a la ciudadanía tomar decisiones políticas directamente en las urnas³. En esta definición se agrupa un amplio espectro de mecanismos que

² Se sigue aquí la diferenciación de Pierre Rosanvallon entre legitimidad electoral y legitimidad de las decisiones (Annunziata 2013).

³ No incluimos aquí la iniciativa legislativa cuando la propuesta elaborada por los ciudadanos queda en manos del Congreso. Aunque coincidimos con Daniel Zovatto (2014:14) en que “es un procedimiento político de participación ciudadana”, no acordamos en que sea de participación “directa”, ya que las decisiones quedan

pueden diferenciarse según el origen de la convocatoria: referéndum obligatorio, referéndum de autoridades (“desde arriba”, o *top down*) y referéndum o iniciativa ciudadana o popular (también conocida como democracia directa, “desde abajo”, o *bottom up*) (Serdült y Welp 2012).

1. Los tipos de mecanismos

El referéndum constitucional obligatorio suele regularse para la ratificación de reformas constitucionales o de tratados internacionales, entre otros. Al activarse por vía constitucional (con independencia de la voluntad del gobierno de turno) y para aprobar o rechazar decisiones de especial trascendencia, hay acuerdo en torno a su valor como salvaguarda de la voluntad ciudadana (Auer 2008). Otro tanto ocurre con los MDD “desde abajo”, que van más lejos al otorgar un rol activo a la ciudadanía, ya sea como *veto player* o como creador de agenda, ya sea mediante la posibilidad de bloquear leyes (referéndum opcional), rechazarlas (referéndum derogatorio), proponerlas o modificarlas (iniciativa legislativa o constitucional), o revocar el mandato de representantes (referéndum revocatorio), mediante el cumplimiento de determinados requisitos (la recolección de firmas, entre otros).

El referéndum de autoridades y, en particular, el impulsado por el presidente, es llamado para ratificar decisiones tomadas o para dirimir conflictos entre poderes, conllevando un riesgo de manipulación y/o plebiscitarismo (Barczak 2001). Sin embargo, Altman (2010) ha mostrado que la tasa de aprobación de las consultas iniciadas por el presidente en América Latina es apenas del 55%. El autor no desestima que, en algunas oportunidades, los MDD sean usados como ejercicios de movilización popular acordes con los deseos de las élites de turno, pero destaca que la ciudadanía es más compleja y menos manipulable de lo que a menudo se sugiere. Aun acordando con Altman, queda abierta la cuestión de si esas decisiones se cumplen o no, especialmente cuando los resultados son adversos a los previstos por los gobiernos que los inician.

2. Las provisiones existentes en América del Sur

Al analizar y agrupar las provisiones legales existentes a la fecha [noviembre de 2014] encontramos tres modelos que indican las potencialidades de los MDD en los países de América del Sur. Estos incluyen un modelo *limitado*, en que no se espera que los mecanismos tengan un efecto considerable sobre el sistema (a menos que sean acompañados por otras condiciones, tales como una profunda crisis o movilización ciudadana); un modelo de *equilibrio*, en el que la democracia directa puede jugar un papel relevante, permitiendo a los ciudadanos influir en la toma de decisiones con relativa autonomía y, finalmente, un modelo *ampliado*, en el que los MDD pueden tanto permitir el equilibrio observado en la categoría mencionada previamente, así como constituir un reto a la democracia representativa, al otorgar (aún más) poder a las autoridades (véase *tabla 1*).

(1) Democracia directa limitada, en que los mecanismos son controlados por las autoridades. Aquí se agrupan Brasil, Argentina y Chile. Si en sistemas presidencialistas, en que el Ejecutivo cuenta con amplios poderes y el referéndum podría contribuir a incrementar aún más estos poderes, los tres países que se agrupan en esta definición escapan a esta lógica. Esto es así porque en Brasil solo el Parlamento tiene estos poderes, en Argentina el presidente tiene poder de convocar a un referéndum, pero sus resultados no son vinculantes, mientras sí son

en manos del Parlamento, mientras consideramos que el impacto o consecuencias sobre el sistema político no depende del mecanismo sino del contexto en que se desenvuelva el reclamo. En este sentido, nos basamos en las consecuencias tenidas por las iniciativas argentinas (tratadas por el Congreso en momentos de crisis e ignoradas en otros, véase Lafferriere 2009) y el estudio de las iniciativas constitucionales en Perú (Lozano 2014), que fueron desestimadas sin tratamiento en la mayoría de los casos, sin que esto implique violación de la ley.

vinculantes los resultados de una consulta parlamentaria, en tanto que en Chile el mecanismo solo puede ser convocado en una situación específica de bloqueo entre el Ejecutivo y el Parlamento⁴.

(2) Democracia directa de equilibrio, en que existen provisiones que habilitan a los ciudadanos o a la Constitución (Perú), en que además de estos puede activar el referéndum constitucional una minoría parlamentaria (Uruguay) o en que la activación corresponde por mandato constitucional, por el Parlamento o por el presidente, pero este último solo puede convocar el referéndum reactivo (Paraguay). En el caso peruano el referéndum obligatorio es restringido en la medida en que las reformas constitucionales deben ser sometidas a referéndum pero este referéndum puede evitarse⁵. En Uruguay el referéndum administrativo permite presentar proyectos de reforma constitucional a dos quintos del total de la Asamblea, y luego deben ser sometidos a consulta popular (artículo 331b). En Paraguay el presidente puede iniciar una consulta pero requiere de la aprobación del Congreso⁶.

(3) Democracia directa ampliada, en que un amplio espectro de mecanismos están regulados, con casos en que todos los mecanismos descritos aquí se encuentran regulados (Colombia, Venezuela, y Bolivia), y el caso ecuatoriano, en que el presidente, la Asamblea y la ciudadanía pueden convocar a consultas, pero no se ha regulado el referéndum obligatorio.

Tabla 1
MDD regulados a nivel nacional en América del Sur (2014)*

País	Obligatorio	Top down/autoridades		Bottom up / ciudadanía		
		Ejecutivo	Legislativo	Iniciativa	Referéndum abrogativo	Revocatoria del mandato
Argentina	No	Sí / consultativo	Sí / vinculante	No	No	No
Bolivia	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Brasil	No	No	Sí	No	No	No
Chile	No	Sí	No	No	No	No
Colombia	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Ecuador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Paraguay	Sí	Sí	Sí	No	No	No
Perú	Sí 1	No	No	Sí	No	No
Uruguay	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No
Venezuela	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Fuente: Constituciones de Argentina (1994), Bolivia (2009), Brasil (1988), Chile (1980), Colombia (1991), Ecuador (2008), Paraguay (1992), Perú (1993), Uruguay (1967) y Venezuela (1999). En algunos casos se han introducido reformas pero las mismas no han afectado la provisión de mecanismos de democracia directa.

* Se considera la regulación vigente a octubre de 2014.

⁴ Artículo 128 de la Constitución de Chile: “Si el Presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por ambas Cámaras y éstas insistieren en su totalidad por las dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, el Presidente deberá promulgar dicho proyecto, a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito.”

⁵ Artículo 206 de la Constitución del Perú: “Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La Ley de Reforma Constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República”.

⁶ Artículo 259 del Código Electoral, Ley N.º 834: “La autorización para la convocatoria del cuerpo electoral por vía del Referéndum legislativo, en cualquiera de sus modalidades, consultivo o vinculante es competencia exclusiva del Congreso, (...)”.

Pero el diseño institucional es solo una cara de la moneda, mientras las garantías para ejercer estos derechos, la capacidad de organización de la sociedad civil y las respuestas del sistema a las demandas planteadas juegan un papel clave. Así, las categorías derivadas del plano normativo podrían ser invertidas en la práctica. Puede no haber prácticas en absoluto, puede haber prácticas de acuerdo con la regulación o puede darse un marcado desequilibrio entre el tipo de mecanismos regulados y el tipo de mecanismos utilizados. Esto se observará a continuación.

Las prácticas

No hubo consultas en Argentina ni en Chile durante el periodo (2000-2014), pero cabe destacar que en Chile la presidenta Michelle Bachelet (asumió el 11 de marzo de 2014) ha planteado como parte de su agenda de gobierno la reforma de la Constitución por vía de la Asamblea Constituyente y con el plan de incorporar mecanismos de participación ciudadana (Soto Barrientos 2014). También en Brasil la reelecta presidenta Dilma Rousseff ha incorporado a su agenda la reforma política, para lo que ha sugerido la realización de un referéndum o plebiscito⁷. En Ecuador, por el contrario, se ha pasado de activaciones desde arriba al bloqueo de los intentos de activación por reunión de firmas. El gobierno de Rafael Correa ha dado marcha atrás en su discurso de promoción de la participación ciudadana para interponer obstáculos a la realización de consultas y elevar un discurso en contra de posibles activaciones “desde abajo” (en particular, en el caso del Yasuní y de la reforma de la Constitución vigente para introducir la reelección indefinida)⁸.

En cuanto a las prácticas efectivas, 51 cuestiones fueron sometidas a referéndum en ocho países durante el periodo. El dato sobre el número de consultas debe ser confrontado con la cantidad de convocatorias, ya que en casos como el colombiano o el ecuatoriano se ha sometido a consulta ciudadana a un gran número de cuestiones en una fecha única (quince cuestiones en Colombia el 25 de octubre de 2003 o nueve temas en Ecuador el 7 de mayo de 2011). En cuanto a los tipos de mecanismos utilizados con más frecuencia, se mantiene el predominio del referéndum activado por las autoridades (presidente o Parlamento) (38, ocurridos en todos los países en que hubo prácticas, con la excepción de Paraguay y Perú) seguido de lejos por el obligatorio (ocho de los que tres ocurrieron en Bolivia, uno en Ecuador, uno en Paraguay y tres en Venezuela) y el activado por la ciudadanía (cinco de los que tres ocurrieron en Uruguay, uno en Venezuela y uno en Perú)⁹.

A continuación, la tabla sintetiza las consultas, considerando su origen y resultados, confirmando algunos hallazgos de la literatura y ampliando otras cuestiones. En la línea de estudios previos, en el inicio del siglo, pese a que existe un predominio de las activaciones desde arriba, los presidentes no solo no tienen garantizada la ratificación de sus preferencias (como ocurrió en Venezuela 2007), sino que ni siquiera tienen garantizada la asistencia del número de votantes requerido para validar una elección (tal fue el caso en Colombia 2003). Por otra parte, los ciudadanos tampoco tienen garantizado que se dé cumplimiento a las decisiones tomadas en las urnas (Venezuela 2002, Perú 2010) mientras las limitaciones del referéndum para poner en discusión opciones complejas pueden derivar en considerables limitaciones a la hora de implementar políticas (Bolivia 2004).

⁷ La Ley N.º 9.709/1998 regula el plebiscito (“O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido”) y el referendo (“referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição”. Ambos deben ser convocados por decreto legislativo, a propuesta de, al menos, un tercio de los miembros de cualquiera de las cámaras.

⁸ Las últimas noticias señalan que la corte ha rechazado el pedido de consulta en torno a la reelección indefinida que el presidente espera pasar con la aprobación de la mayoría de su partido en la asamblea (véase el siguiente enlace <http://www.eluniverso.com/noticias/2015/02/13/nota/4553026/niegan-pedido-consulta-sobre-reeleccion-indefinida-guillermo-lasso>).

⁹ La información detallada de las consultas es accesible en www.c2d.ch

Tabla 2
Consultas por tipo de mecanismo, validez y aprobación (América del Sur 2000-2014)

País	Número de activaciones por mecanismo			Total	Válido	Aprob.	Rech.	¿Se respeta la decisión?		
	Oblig.	d/arriba	d/abajo					SÍ	Parc.	No
Bolivia	3	7	-	10	10	8	2	4	6	--
Brasil	-	1	-	1	1	-	1	1	--	--
Colombia	-	15	-	15	1	1	-	1	--	--
Ecuador	1	13	-	14	14	14	-	*	*	*
Paraguay	1	-	-	1	1	1	-	1	--	--
Perú	-	-	1	1	1	1	-	--	--	1
Uruguay	-	1*	3	4	4	2	2	4	--	--
Venezuela	3	1	1	5	5	2	3	2	2	1
Total	8	38	5	51	37	29	8	2	5	4

Fuente: Elaboración propia. * Análisis en proceso.

En seguida, se presenta una breve descripción de las experiencias, con la intención de ofrecer un análisis de sus consecuencias.

1. Descripción de casos

1.1. Bolivia: a medio camino en el objetivo de resolver conflictos

Bolivia incorporó mecanismos de democracia directa en 2004 para resolver el conflicto generado en torno a “la guerra del gas” y, posteriormente, los amplió en la Constitución aprobada en 2009. La decisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) (agosto 2002-octubre 2003), de exportar hidrocarburos a Estados Unidos a través de Chile desató la indignación popular debido al arraigado sentimiento antichileno originado en la Guerra del Pacífico (1879-1884). En octubre de 2003, en lo que se dio en llamar la ‘guerra del gas’, se produjo una gran movilización ciudadana que derivó en la dimisión de Sánchez de Lozada. El vicepresidente Carlos Mesa asumió el cargo y se comprometió a llamar a un referendo vinculante, para lo que se reformó la Constitución. El referéndum se realizó el 18 de julio del 2004 y resultó en un triunfo del Sí. Un problema de esta consulta provino de la misma amplitud y ambigüedad en la formulación de las preguntas, que a pesar de los resultados permitió un amplio espectro de interpretaciones. Así, “el Congreso emitió una ley distinta de la iniciativa presidencial, que estipulaba que el gas en boca de pozo era de propiedad estatal, estableciendo una regalía de 18% y un impuesto de 32%” (Salazar Rodrigo 2009)¹⁰.

La siguiente consulta tuvo lugar en 2006, refiriendo al histórico reclamo por el reconocimiento de las autonomías. El referendo obtuvo la mayoría en los

¹⁰ Al asumir Evo Morales, aprobó un decreto que ordenó a las empresas extranjeras ceder a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la producción, transporte, refinación, almacenamiento, distribución y actividades comerciales e industriales de producción de hidrocarburos; estableció que el Estado debía controlar, al menos, el 51% del capital accionario de las empresas privatizadas durante los años noventa y de las dos refinadoras de Petrobrás, y fijó un impuesto de 82% para las explotaciones gasíferas más grandes.

departamentos de la medialuna mientras fue rechazado en el resto. Dado que los segundos cuentan con mayor cantidad de población, la propuesta fue rechazada. Esta experiencia es la que más fuertemente puso en evidencia la incapacidad del referéndum para resolver conflictos, al reafirmar la presencia de mayorías contrapuestas.

En 2008, el referéndum fue nuevamente activado en medio del conflicto entre el MAS y la oposición, esta vez con la intención de someter a consulta popular la ratificación o revocación del mandato del presidente y de ocho prefectos. Dos prefectos opositores fueron removidos de sus cargos (La Paz y Cochabamba) y el resto fue ratificado. Pocos meses más tarde, en 2009, hubo una nueva consulta para ratificar la Constitución y decidir sobre las extensiones de propiedad de la tierra. La Constitución fue ratificada y entró en vigor, y una de las opciones de regulación de la propiedad fue aprobada en detrimento de la otra.

1.2. Brasil: el valor de las campañas para influir sobre el voto

Plebiscitos y referendos susceptibles de ser activados por el poder legislativo fueron introducidos en Brasil con la Constitución de 1988, sin embargo, apenas se han utilizado¹¹. El único caso registrado en el periodo analizado refiere a la consulta sobre la tenencia de armas. El 22 de diciembre de 2003 el presidente Lula da Silva firmó la Ley N.º 10.826, que regulaba el uso de armas y munición. Dicha ley establecía la prohibición de comercializar armas de fuego, señalando que entraría en vigencia si era aprobada en referéndum. De acuerdo con esta norma, el 6 de julio de 2005 el Parlamento pasó el decreto N.º 780/2005, fijando, dentro del referendo, la pregunta: “¿debe ser prohibido el comercio de armas de fuego y munición en Brasil? (“O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil?”).

Según la investigación de Lisovsky y Szabó de Carvalho (2008), el referéndum estuvo a punto de no convocarse debido a la presión de los grupos proarmas, que temían la consulta popular, pero la presión de organizaciones de la sociedad civil consiguió que se realizara. A pesar de que las encuestas iniciales mostraban un claro apoyo a la prohibición, durante la campaña las preferencias se modificaron. La campaña por el no se orientó a diferenciar el apoyo a las armas del apoyo a la prohibición y fortalecer la idea de que tener un arma era un derecho individual (con eslogans como “Hoy puedo no precisar de un arma, pero si un día precisase, quiero tener el derecho de comprar”). Una encuesta mostró que, a mitad de campaña, el 70% del público señalaba que no se sentía preparado para tomar una decisión como esa. En paralelo al crecimiento del no, la ciudadanía habría comenzado a percibir que el referéndum no tenía mayor importancia (no tendría ningún impacto sobre los índices de violencia) y, por tanto, era mejor mantener las cosas como estaban.

1.3. Colombia: la crisis de representación no se resuelve (solo) con nuevas instituciones

Colombia fue el primer país de la región en introducir, por vía de la Asamblea Constituyente, un amplio espectro de mecanismos de participación ciudadana, en 1991. Sin embargo, estas instituciones no han sido capaces de renovar la confianza y la legitimidad del sistema.

En el periodo analizado se registra en el país una convocatoria a referéndum. Ocurrió poco tiempo después de asumir el poder Álvaro Uribe (7 de agosto de

¹¹ Una disposición transitoria obligaba a llamar a consulta popular sobre las opciones monarquía o república, presidencialismo o parlamentarismo en 1993.

2002-7 de agosto de 2010). Uribe inició una fuerte ofensiva para reformar las instituciones. En este contexto, lanzó una convocatoria a referendo para habilitar una reforma constitucional que tuvo lugar el 25 de octubre de 2003. Quince fueron las preguntas que, superado el control constitucional, fueron presentadas ante la ciudadanía en un referendo convocado por decreto del poder ejecutivo¹² contra “la corrupción y la politiquería”. A pesar de la intensa campaña lanzada por el gobierno, solo la primera pregunta superó el 25% de participación (alcanzado apenas el 25,11%, mientras todas las demás quedaron en el margen de 22 y 24%) y, por tanto, sus resultados entraron en vigor mientras las restantes fueron desestimadas¹³.

Las quince preguntas constituían una detallada y extensa lista de cuestiones (la formulación pedía la aprobación de los párrafos que serían incorporados a la norma constitucional) que habían formado parte de las promesas de campaña de Uribe. Entre ellas, destacan la reducción de escaños del Congreso de 268 a 218 (durante la campaña había prometido reducirlos a 150), la supresión de entidades de control regional y mayores penalizaciones contra los funcionarios públicos corruptos. Los comicios tuvieron lugar en medio de numerosos incidentes que incluyeron combates con las FARC en el departamento de Cauca, secuestros de doce jurados electorales en el departamento de Valle, el estallido de una bomba de estruendo en Medellín y el derribo de torres de energía en los departamentos de Arauca, Guajira, Valle y Nariño¹⁴.

1.4. Ecuador: ¿decidir o legitimar a los que deciden?

En Ecuador, durante el periodo analizado, se sometieron catorce cuestiones a consulta en seis llamados. Todos los procesos que tuvieron lugar durante el gobierno de Rafael Correa fueron vinculantes, mientras los tres previos fueron consultivos.

En mayo de 2011 el Ejecutivo, encabezado por Correa, propuso nueve reformas constitucionales que referían diversidad de temas. Las dos primeras apuntaban a la modificación de los plazos para la caducidad de la prisión preventiva y la modificación de parámetros de las medidas sustitutivas de privación de libertad. En el primer caso el argumento apuntaba a la mejora de la seguridad ciudadana y en el segundo evitar la impunidad y garantizar la comparecencia a los juicios penales de las personas procesadas. La tercera pregunta proponía prohibir la participación accionaria en el ámbito financiero o comunicacional de empresas e instituciones privadas referentes a esas áreas, marcando como objetivo el evitar conflictos de intereses. Las siguientes (4 y 5) perseguían la reforma de la composición del Consejo de la Judicatura y la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial, así como la reforma de la justicia y la regulación de las actividades y responsabilidades de los medios de comunicación. Otras cuestiones referían al establecimiento de medidas para tipificar como delito el enriquecimiento privado no justificado, la prohibición de los juegos de azar con fines de lucro, y la tipificación como delito del incumplimiento de las obligaciones laborales del empleador.

¹² Decreto N.º 2000 del 17 de julio de 2003. http://www.registraduria.gov.co/Informacion/images/dec2000_oct2003.pdf

¹³ En consecuencia, el inciso 5 del artículo 122 de la Constitución es reformado para introducir el siguiente párrafo: Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado. Tampoco quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.

¹⁴ *El Universo*, 25-10-2003: “Concluyó con relativa calma referendo en Colombia”.

El referéndum del 24 de julio de 2008 fue el único obligatorio registrado en el periodo para ratificar la Constitución elaborada por una Asamblea Constituyente, de acuerdo con los principios señalados por una consulta previa, el 15 de abril de 2007, que abrió las puertas a la reforma constitucional. Ambas fueron aprobadas y sus resultados aplicados. Cabe destacar que la Constitución preveía su ratificación, pero no establece la obligatoriedad del mecanismo para reformas futuras¹⁵.

Aunque Correa ha utilizado el referéndum con cierta frecuencia en sus periodos iniciales de gobierno, los mecanismos de democracia directa ya habían sido utilizados con cierta intensidad en Ecuador (Morales Viteri 2009). En 2006 hubo otras tres consultas (no vinculantes). El 10 de agosto de 2006 el presidente Palacio propuso quince cuestiones para una Consulta Popular. El Parlamento las rechazó porque referían a reformas constitucionales para cuya consulta el Parlamento debía dar su acuerdo. El 25 de setiembre Palacio firmó el decreto 1871 convocando un plebiscito presidencial (no vinculante) para decidir sobre tres cuestiones: la primera, referida a considerar como política de Estado prioritarias para la inversión del sector público las ocho políticas del Plan Decenal de Educación (2006-2015) (universalización de la educación inicial y de la educación general básica, erradicación del analfabetismo, mejoramiento de la calidad de la educación, etcétera). La segunda pedía el acuerdo para que en un plazo de cinco meses el Congreso Nacional debata y apruebe leyes encaminadas a destinar recursos suficientes que garanticen la prevención y la atención médica de patologías y elevar el 0,5% anual el porcentaje de inversión en relación al PIB hasta alcanzar, al menos, el 4%. La última pregunta refería a pedir al Congreso Nacional que apruebe leyes encaminadas a garantizar que los recursos petroleros no previstos o superiores a lo presupuestado en el presupuesto general del estado sean destinados a inversión social y a la reactivación productiva (Morales Viteri 2009).

1.5. Paraguay: la abstención como problema

De acuerdo con el artículo 290 de la Constitución de 1992, la aprobación de enmiendas constitucionales en Paraguay requiere del acuerdo por mayoría absoluta de ambas cámaras del Congreso; luego debe ser remitida al Tribunal Superior de Justicia Electoral para que, dentro del plazo de ciento ochenta días, se convoque a un referéndum. Si el resultado de este es afirmativo, la enmienda quedará sancionada y promulgada, incorporándose al texto institucional. Siguiendo estas indicaciones, tras aprobar ambas cámaras, el voto de los paraguayos residentes en el exterior la cuestión fue sometida a referéndum. Con un 13% de participación, la mayoría aprobó la enmienda, que entró en vigor.

1.6. Perú: se decide, pero no se implementa

La activación de mecanismos de democracia directa introducidos en Perú en 1993, durante el gobierno de Fujimori, ha enfrentado innumerables problemas. Por ejemplo, pese a reunir los requisitos formales, no se convocó a consulta para evitar la tercera reelección de Fujimori (Welp 2008). Durante el periodo analizado hubo una sola consulta, originada desde abajo, por recolección de firmas. El 29 de marzo de 2001, la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPP), presentó la iniciativa legislativa ciudadana “Proyecto de Ley de Devolución de Dinero del Fonavi a los Trabajadores que contribuyeron al mismo”, que, cumpliendo los requisitos establecidos para una iniciativa indirecta, fue remitida al Congreso de la República para su votación.

¹⁵ Un tema en el debate sobre la posible incorporación de la reelección indefinida, que el gobierno quiere pasar por mayoría parlamentaria y la oposición rechazar a través de una consulta desde abajo de momento no aprobada por el tribunal (conflicto irresuelto al momento de revisar este texto, en febrero de 2015).

El proyecto de ley ingresó al Congreso de la República (n° 864/2001) pero no fue considerado¹⁶. Por eso la ANFPP solicitó la convocatoria a referéndum, amparándose en los artículos 16 y 41 de la Ley N° 26300, que disponen que si una iniciativa legislativa es rechazada o modificada sustancialmente, los promotores de la misma pueden solicitar el referéndum para consultar a la ciudadanía su aprobación, adicionando las firmas necesarias para completar el porcentaje de ley. Cumplido este proceso, el 7 de octubre de 2008, el Jurado Nacional de Elecciones convocó a Referéndum Nacional para la aprobación o desaprobación del “Proyecto de Ley de Devolución de Dinero del Fonavi a los Trabajadores que contribuyeron al mismo”, a realizarse el 3 de mayo de 2009. El referéndum fue suspendido por falta de recursos económicos para ser convocado disponiéndose una nueva fecha para la convocatoria: el 3 de octubre de 2010. Los resultados fueron favorables, por lo que se dispuso la entrada en vigencia de las normas aprobadas a partir del día siguiente de la publicación de los resultados oficiales en el Diario Oficial *El Peruano*¹⁷. A la fecha la ley no se ha hecho efectiva.

1.7. Uruguay: la calidad de la democracia cuando la ciudadanía tiene voz y voto

Uruguay fue uno de los primeros países latinoamericanos en regular y poner en práctica los MDD, durante el siglo XX (Lissidini 2014). El plebiscito constitucional fue incluido en la Constitución de 1934, pero los referendos facultativos contra leyes ordinarias de carácter nacional se incluyeron más tarde, en la Constitución de 1967. Desde la vuelta a la democracia en 1985, los ciudadanos uruguayos han tenido la oportunidad de decidir directamente sobre algunos de los temas más candentes de la agenda política¹⁸. Estas consultas han sido originadas por mandato constitucional, por la vía del referéndum administrativo y por la ciudadanía. Presentando un determinado número de firmas un grupo de ciudadanos puede someter a referéndum una ley aprobada por la legislatura (durante el primer año de su promulgación) o una propuesta de cambio constitucional.

Entre 2000 y la actualidad se han producido cuatro consultas. En 2003, un referéndum activado por la ciudadanía consiguió derogar la ley de privatización de una empresa pública del Estado (ANCAP). En 2004, la ciudadanía se movilizó y reunió los requisitos para activar un referéndum con el objetivo de incluir el agua potable como un derecho humano básico, manteniendo todos los recursos de la extracción, producción y comercialización del agua en manos del Estado. Ambas consultas fueron exitosas. En 2009 hubo otras dos consultas, una iniciada por la ciudadanía para derogar la Ley de Inmunidad y otra iniciada por el legislativo para introducir el voto de los uruguayos residentes en el exterior. Ambas fueron rechazadas. Las decisiones tomadas entraron en vigor. Más allá de las preferencias ideológicas ante referendos específicos, la democracia uruguaya se ha visto fortalecida por la vigencia de mecanismos mediante los que la ciudadanía puede hacer escuchar sus preferencias y un sistema político que acata las decisiones tomadas. Otro aspecto a resaltar es que las acciones más frecuentes y también las más exitosas han sido aquellas orientadas al rechazo de una política, que encarnan la negatividad y el rechazo¹⁹. Aquí los MDD canalizan el rechazo de ciertas decisiones de los gobernantes entre las elecciones, funcionan como freno de decisiones inesperadas y no apoyadas por la opinión pública.

¹⁶ Por un análisis de los resultados de estas iniciativas véase Lozano 2014.

¹⁷ Resolución N.º 4905-2010, Jurado Nacional de Elecciones (disponible en www.jne.pe).

¹⁸ Por ejemplo, la indexación de pensiones para paliar el incremento del costo de vida (1989); las privatizaciones (1992, 1993); los intentos de separar las elecciones nacionales de las locales y de reforma de los programas sociales (ambos en 1994); o el incremento del gasto en educación, entre otros (véase c2d database).

¹⁹ Annunziata (2014) ha elaborado un estudio sobre la presencia de la negatividad en algunas experiencias participativas.

1.8. Venezuela: los dobles filos del referéndum

La llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela marcó el inicio de una década signada por el referéndum²⁰. En el año 2002, en el contexto del enfrentamiento del gobierno con los sindicatos, Chávez propuso suspender a los líderes vigentes para elegir una nueva conducción. A pesar de ser cuestionado incluso por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la posición del presidente fue apoyada (62,50% votos a favor y 27,34% en contra), aunque con una elevada abstención (76,5%). En cuanto a las consecuencias, Kornblith (2005) señala que no se incrementó la intervención gubernamental sobre los sindicatos.

En 2004 se inició una consulta contra Chávez. La oposición se organizó en torno a Coordinadora Democrática (CD), integrada por el sector empresarial (Fedecámaras) y los partidos políticos (AD o Primero Justicia), que contaron con un fuerte apoyo de los medios de comunicación privados, y al que más tarde también se sumaron los sindicatos y otras organizaciones sociales. Hubo numerosos recursos judiciales, creación de recursos *ad hoc* para impedir la consulta y enfrentamientos en cada etapa, lo que contribuyó a polarizar aún más la sociedad venezolana (Kornblith 2005). Chávez fue confirmado por el 58,9% de los votos frente a un 40,6%, con una participación cercana al 70%.

En 2007, Chávez impulsó una nueva reforma constitucional, que fue discutida en la Asamblea Nacional. Aunque la mayoría de la Asamblea era afín al gobierno, dado que la Constitución obliga a la ratificación ciudadana, se llamó a un nuevo referéndum. La consulta se dividió en dos opciones que implicaban el rechazo o la aceptación (en dos bloques de artículos) de la reforma impulsada. Nuevamente hubo un alto nivel de polarización y personalización de la campaña, que principalmente se centró en torno a avalar o rechazar la reelección indefinida. En un muy ajustado resultado (el bloque A obtuvo el 49,34% de votos a favor y el 50,65% en contra mientras el B obtuvo un 48,99% a favor y un 51,01% en contra); con un 44% de abstención, perdió la opción del presidente. Sin embargo, buena parte de las reformas fueron introducidas posteriormente por vía parlamentaria (ley habilitante), mostrando el escaso respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas (Chaguaceda y León 2014). Poco más de un año más tarde, Chávez volvió a convocar un referéndum para introducir la reelección indefinida (obligatorio, ya que se trataba de una reforma constitucional). Esta vez las urnas le dieron la victoria al gobierno (54% de votos a favor con una abstención del 30%) y la medida entró en vigor.

1.9. Prácticas y normas

Al combinar las categorías derivadas de la normativa (democracia directa limitada, de equilibrio o ampliada) con el análisis de la intensidad de activación (nula, reducida cuando se registran hasta dos fechas de consultas en el periodo analizado, o relevante cuando son más de dos) y el origen del mecanismo (desde arriba, desde abajo u obligatorio) podemos presentar los siguientes resultados (*tabla 3*): democracia directa restringida, ampliada con predominio de prácticas iniciadas por el Ejecutivo, dominada por el Ejecutivo (Ecuador, Venezuela desde 2005) y de equilibrio (Uruguay).

²⁰ El primero fue el de 1999, que buscaba aprobar la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La consulta incluía dos preguntas orientadas a conocer el acuerdo de la población con la convocatoria a una Asamblea Constituyente para 'transformar el Estado y crear un Nuevo Ordenamiento Jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa'. Ambas obtuvieron un resultado muy favorable para el gobierno con una aceptación superior al 80% pero también con un alto nivel de abstención. Quienes se oponían a la Asamblea Constituyente se centraron en la crítica a la concentración de poderes en el presidente, sin embargo, la campaña fue débil y poco organizada y osciló entre pedir la abstención o el voto negativo. Pocos meses después fue llamado un segundo referéndum, de ratificación de la nueva Constitución que nuevamente fue muy favorable para el gobierno (lo apoyó el 71% del electorado), pero también con una alta abstención (62%).

Tabla 3
Caracterizando países según sus normas y prácticas con MDD

País	Normas	Intensidad de uso	Origen (usos)	Tipo
Argentina	limitada	nula	--	Restringida
Bolivia	ampliada	relevante	Obligatorio, desde arriba y desde abajo	Ampliada con predominio del Ejecutivo
Brasil	limitada	baja	Desde arriba	Restringida
Chile	limitada	nula	--	Restringida
Colombia	ampliada	baja	Desde arriba	Restringida
Ecuador	ampliada	relevante	Obligatorio (1) y desde arriba	Dominada por el Ejecutivo
Paraguay	equilibrio	baja	Obligatorio	Restringida
Perú	equilibrio	baja	Obligatorio y desde abajo	Restringida
Uruguay	equilibrio	relevante	Obligatorio, administrativo y desde abajo	Equilibrio
Venezuela	ampliada	relevante	Obligatorio, desde arriba y desde abajo	Ampliada con predominio del Ejecutivo-tendencia hacia el dominio del Ejecutivo

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

En estas conclusiones quisiera centrarme en algunos aspectos que refieren al momento que viven los mecanismos de democracia directa en la región y los retos que suponen con relación al fortalecimiento de las democracias latinoamericanas.

(1) Los MDD mantienen un rol destacado en la agenda pero se han diversificado las posiciones y tensiones que generan mientras, de momento, han disminuido las prácticas. Puntualmente, en Chile y Brasil las presidentas recientemente (re) electas Michelle Bachelet y Dilma Rousseff han planteado durante la campaña la necesidad de reformar las respectivas constituciones mediante una Asamblea Constituyente participativa en el primer caso y mediante la convocatoria a plebiscito o referendo en el segundo. En el extremo opuesto, no se han producido nuevas consultas en Venezuela ni en Bolivia desde 2009. El gobierno de Rafael Correa ha dado marcha atrás en su discurso de promoción de la participación ciudadana para interponer obstáculos a la realización de consultas y elevar un discurso en contra de posibles activaciones “desde abajo” (en particular, en el caso del Yasuní y de la reforma de la Constitución para introducir la reelección indefinida).

(2) A menudo se observa una considerable distancia entre la consulta y la aplicación de las decisiones tomadas. Las experiencias de Bolivia en 2004,

Perú en 2010 y Venezuela en 2002 y 2007 muestran que por diversas razones el referendo permite la participación ciudadana pero no garantiza que las decisiones sean aplicadas. En Bolivia esto se relacionaría especialmente con la formulación ambigua o extremadamente compleja de las preguntas (referéndum de 2004); en Perú con la viabilidad de la iniciativa; en Venezuela con la manipulación de la voluntad ciudadana (parcialmente en lo que refiere a la consulta de 2007) o con el uso del referéndum como arma de enfrentamiento más que de elaboración de políticas (consulta de 2002).

(3) La importancia de las campañas: este es un tema poco trabajado por la literatura sobre las prácticas de MDD en la región y que refiere tanto a la utilización de fondos públicos para promover una de las posiciones como a la influencia de las campañas en la formación de la opinión pública. La consulta sobre las armas (Brasil 2005) invita a profundizar sobre esta cuestión también en los otros casos.

(4) Participación: las experiencias colombiana y paraguaya y algunas de las consultas venezolanas muestran que la simple introducción de mecanismos de participación no cambia las preferencias y percepciones ciudadanas sobre el funcionamiento del sistema político y no promueve una mayor participación e involucramiento en los asuntos públicos.

(5) La formulación de las preguntas: como se ha mencionado en el punto 2, las preguntas planteadas y a menudo los largos listados de cuestiones que se someten al escrutinio ciudadano no contribuyen a un debate razonado y exhaustivo, poniendo en evidencia una de las mayores limitaciones del referéndum. También cabe mencionar que en varias ocasiones (en Ecuador, por ejemplo) la consulta ha perseguido más legitimar a quien la convoca que incorporar a la ciudadanía a los procesos de toma de decisiones. Aunque en casos como el uruguayo el rechazo a ciertas políticas ha permitido reforzar el rendimiento de cuentas y la representación por mandato.

En el análisis combinado de la introducción y usos de mecanismos de democracia directa (en un mismo periodo de gobierno) cuando las prácticas son activadas principalmente desde arriba permite profundizar sobre la relación entre populismo y democracia directa y sobre introducciones orientadas a la ampliación del juego democrático y otras que resultan ser estratégicas, cuando los gobernantes introducen y usan mecanismos de democracia directa para superar bloqueos institucionales y promover reformas de calado (Ruth y Welp 2014). Otro aspecto que resulta indispensable mencionar refiere al tiempo. Reformas introducidas con una voluntad determinada pueden posteriormente ser desvirtuadas incluso por los mismos actores que introducen las reformas (podría ser el caso en Venezuela y Ecuador, en que, de forma creciente, se ha tendido a generar obstáculos *ad hoc* a la participación ciudadana). Futuros trabajos deberán dar cuenta de estas cuestiones.

A modo de cierre, podemos decir que los MDD han funcionado más como un síntoma o expresión del Estado y la calidad de las democracias latinoamericanas que como una solución a sus problemas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALTMAN, David
2010 "Plebiscitos, referendos e iniciativas populares en América Latina: ¿Mecanismos de control político o políticamente controlados?", en *Perfiles Latinoamericanos*, núm. 35, enero-junio, pp. 9-34.
- ANNUNZIATA, Rocío
201 "Decisión y deliberación en las formas no electorales de participación en Argentina: el caso del presupuesto participativo", en *Estudios Políticos*, núm. 43, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 115-135.
- AUER, Andreas
2008 "Una mirada suiza sobre la democracia directa en América Latina", en Lissidini, Alicia, Yanina Welp y Daniel Zovatto (coords.) *Democracia directa en Latinoamérica*. Buenos Aires: Prometeo.
- BARCZAK, Monica
2001 "Representation by Consultation? The Rise of Direct Democracy in Latin America", en *Latin American Politics & Society*, vol. 43, num. 3, pp. 37-59.
- CHAGUACEDA, Armando y María Elena LEÓN
2014 "Democracia protagonista en Venezuela: entre la retórica empoderadora y las prácticas hegemónicas", en *Fronesis*, vol. 21, núm 2, pp. 243-262.
- KORNBLITH, Miriam
2005 "The referendum in Venezuela: Elections versus democracy", en *Journal of Democracy*, num. 16, pp. 124-137.
- KRIESI, Hanspeter
2005 *Direct Democratic Choice. The Swiss experience*. Lanham, Maryland: Lexington Press.
- LAFFERRIERE, Emilio
2008 "Argentina: La participación ciudadana como desafío", en Welp, Yanina y Uwe Serdült. *Armas de doble filo. La participación ciudadana en la encrucijada*. Buenos Aires: Prometeo.
- LISSIDINI, Alicia
2014 "Paradojas de la participación en América Latina. ¿Puede la democracia directa institucionalizar la protesta?", en Lissidini, Alicia, Yanina Welp y Daniel Zovatto (coords.). *Democracias en movimiento*. México: UNAM.
- LISOVSKY, Mauricio e Iliona SZABÓ DE CARVALHO
2008 "El referéndum sobre las armas en Brasil: el elector como víctima virtual", en Cámara de Comercio de Bogotá, *Perspectivas y enfoques sobre percepción de seguridad ciudadana*. Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, pp. 67-85.
- LOZANO, Jeanette
2014 *Las Iniciativas Ciudadanas de reforma constitucional en Perú: Mecanismo ineficaz para la solución de los problemas de representación*. Aarau, Centre for Democracy Studies Aarau (ZDA) at the University of Zurich [c2d Working Papers Series 45]. Disponible en: http://www.zora.uzh.ch/94256/1/C2D_WP45.pdf

- MANIN, Bernard
1998 *Los principios del gobierno representativo*. Madrid, Alianza Editorial.
- MORALES VITERI, Juan Pablo
2009 “Ecuador: Mecanismos de democracia directa”, en Welp, Yanina y Uwe Serdült. *Armas de Doble Filo. La participación ciudadana en la encrucijada*. Buenos Aires: Prometeo.
- PITKIN, H.
1967 *The concept of representation*. Berkeley, University of California Press.
- RUTH, Saskia & Yanina WELP
2014 “How participative are Latin American Populist’s in Public Office?”, en *8th ECPR General Conference*, Glasgow, Scotland, September 2-6, 2014 [Paper prepared for the *8th ECPR General Conference* in Glasgow, Great Britain. Panel: Executive Politics and Populism in Latin America]. Disponible en el enlace: <https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/2daf6af1-acd4-4084-ae9b-f417c647b57d.pdf>
- SALAZAR RODRIGO, Elena
2009 “Bolivia: El referendo”, en Welp, Yanina y Uwe Serdült. *Armas de doble filo. La participación ciudadana en la encrucijada*. Buenos Aires: Prometeo.
- SAMUELS, David J. & Matthew Soberg SHUGART
2003 “Presidentialism, Elections and Representation”, en *Journal of Theoretical Politics*, vol. 15, Issue 1, pp. 33-60. Versión electrónica en formato PDF disponible en: <http://www.polisci.umn.edu/~dsamuels/Samuels-Shugart%20JTP.PDF>
- SERDÜLT, Uwe & Yanina WELP
2012 “Direct Democracy Upside Down”, en *Taiwan Journal of Democracy*, vol. 8, Issue 1, pp. 69-92.
- SOTO BARRIENTOS, Francisco
2014 “Asamblea Constituyente: La experiencia latinoamericana y el actual debate en Chile”, en *Estudios Constitucionales* (Santiago de Chile), vol. 12, núm. 1, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, pp. 397-428. Disponible en el enlace: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82031373009>
- WELP, Yanina
2008 “La participación ciudadana en la encrucijada: Los mecanismos de democracia directa en Ecuador, Perú y Argentina”, en *Íconos, revista de Ciencias Sociales*, núm. 31, Flacso-Ecuador, pp. 117-130.
- ZOVATTO, Daniel
2014 “Las instituciones de la democracia directa”, en Lissidini, Alicia, Yanina Welp y Daniel Zovatto (comps.). *Democracias en movimiento*. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica/705 (pp. 13-70), viii + 399 págs. Versión electrónica en formato PDF disponible en el siguiente enlace: <http://www.idea.int/es/publications/democracies-on-the-move/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageID=66300>

